

Imprimir

Hoy, más que nunca, es evidente el descontento ciudadano y la pérdida de credibilidad de los actores políticos que no logran atraer a una ciudadanía cada vez más escéptica en un escenario marcado por crecientes tensiones políticas, enfrentamientos y divisiones.

La práctica desaparición de los partidos políticos como organizaciones concebidas para agregar intereses y la posibilidad de presentarse a las elecciones recurriendo a la recolección de firmas ha generado en muchos aspirantes – muchos de ellos desconocidos por el gran público – la ilusión de ocupar la primera magistratura, tal como lo revela la última encuesta de Datexco, financiada por la W Radio. Podría pensarse que el descontento ciudadano hacia las instituciones no se ha traducido en indiferencia hacia la política y por ello el elevado número de aspirantes a cargos públicos, pero los datos que expone la mencionada encuesta revelan que un 44 por ciento de los encuestados es indiferente ante la política, no le interesa, no piensa votar por ninguno de los nombres conocidos, o se abstendrá de ir a las urnas.

Otro dato interesante que se desprende de la encuesta es la baja aceptación de los candidatos a la presidencia. Petro, el rival a abatir por sus rivales no logra ir más allá de un 35 por ciento de los votos en una segunda vuelta; así mismo, en caso de que logre superar las barreras que se han levantado frente a él, tendría a Fajardo como contendor.

Las encuestas, sin embargo, son fotografías de una realidad que la acción del hombre puede cambiar, sujeta a estrategias y tácticas que modifican la balanza de poder. En estas elecciones ha prosperado la idea de alianzas y coaliciones entre líderes políticos con aspiraciones electorales, centradas en las figuras de dichos líderes más no en programas definidos ni tomando en cuenta los recursos materiales que toda campaña exige y terminan por definir los resultados.

El llamado centro político, que en principio estaría llamado a romper la polarización política que ha caracterizado los últimos gobiernos, se erosiona bajo el peso de luchas internas. La Alianza Verde que despertó una gran expectativa no termina de decidir si se alía con el Pacto Histórico o con la Coalición de la Esperanza. Ante esta circunstancia y pensando aprovechar la imposibilidad de conformar un “centro” llamado a derrotar las posiciones extremas,

Alejandro Gaviria, presentado ante la opinión como candidato independiente, se ha propuesto – después de un fallido acercamiento con la Coalición de la Esperanza – unir las supuestas fuerzas de centro conformando una nueva coalición con fuerzas políticas de origen liberal y en la que entrarían otras vertientes como la que representa Ingrid Betancourt.

Los datos que han arrojado las encuestas recientes y el tipo de coequiperos que integrarían la alianza que propone Alejandro Gaviria muestran claramente que este es un proyecto que no verá la luz. Su intento de figurar como el purificador de la política colombiana no ha convencido a nadie. Ni el discurso del precandidato ni las compañías que ha escogido para que lo acompañen en su aventura han generado la confianza que todo líder necesita inspirar en sus seguidores.

Y mientras los líderes políticos interesados en arrebatarse el poder a los que lo controlan hoy pierden el tiempo en querellas internas, estos últimos reconfiguran el escenario para conservarlo. Se reformó el Código Electoral modificando los procedimientos de las elecciones de 2022; el Registrador adelantó una cifra de habitantes en el país que incide en el potencial electoral calculado con base en los datos del DANE y entregó las registradurías locales a los caciques políticos de cada municipio. Y como si fuera poco, el Congreso suspendió la Ley de Garantías de manera inconstitucional para revitalizar las prácticas clientelistas que ha sido imposible erradicar en el país.

No falta el candidato que diga que quiere depurar las costumbres políticas, luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia. Sin embargo, un sistema político guiado por lealtades personales y que funciona a partir del intercambio de favores que facilita llegar al poder – que es lo que se propone la suspensión de la Ley de Garantías – distorsiona lo que debería ser el objetivo de la política, es decir, un compromiso con el bien común o, al menos, con los problemas de la comunidad.

Cambiar de un día para otro una cultura política es un imposible. La tarea a corto plazo, empero, es evitar el fraude electoral que se prepara ante los ojos de la ciudadanía. Denunciar acciones encaminadas a entorpecer el juego democrático y estar alerta en las elecciones para

impedir que se trastoquen los resultados de las urnas es un imperativo. La mayoría de la ciudadanía alberga la ilusión de vivir en un país distinto al actual. Violentar esa ilusión mediante actos punibles daría lugar a una nueva frustración y no acarrearía nada bueno.

Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario

Foto tomada de: Semana.com